

C. A. Santiago

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Se confirman las resoluciones de seis de diciembre de dos mil dieciocho, de veinte de junio de dos mil diecinueve, de veinte de febrero de dos mil veinte y de trece de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos rol C-28.665-2018 del Noveno Juzgado Civil de esta ciudad, en causa caratulada “Coloma Osorio, María Cristina con Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado”, por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veinte, la juez titular de dicho tribunal, doña Lidia Virginia Poza Matus, rechazó la demanda, con costas. En contra de esta decisión, la actora dedujo los recursos de casación en la forma y apelación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que previo a analizar este recurso, y también el de apelación, es menester consignar lo siguiente:

1.- La actora, doña María Cristina Coloma Osorio dedujo su demanda señalando que se desempeñó como médico fisiatra en el Instituto de Rehabilitación de Santiago de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, bajo el estatuto del Código del Trabajo, hasta el 6 de mayo de 2015, fecha en la que fue despedida bajo la acusación de ser autora de unos escritos anónimos que contenían expresiones ultrajantes para varios miembros del grupo de fisiatras. Inició un juicio laboral en contra de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado (causa RIT T-511-2015 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago), accionando de tutela laboral y, en subsidio,



de despido injustificado, acogándose esta última acción por sentencia definitiva ejecutoriada. En este juicio se pidió la exhibición del documento que habría fundado la decisión de despido por haber enviado la doctora Coloma los mencionados anónimos, señalando en su oportunidad el abogado de la demandada que tal documento no existía.

2.- La señora Coloma dedujo luego una demanda ante el Decimosexto Juzgado Civil de esta ciudad (rol 6653-2016), en contra de la misma Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, con el objeto de obtener resarcimiento por el daño moral que, en su concepto, le habría causado la conducta de la demandada y que implicó que se acogiera su demanda de despido injustificado. La sentencia de primer grado rechazó la demanda, argumentándose que “esta sentenciadora considera que la demandada efectivamente contaba con los antecedentes suficientes en un grado de verosimilitud adecuado, teniendo en especial consideración las pericias caligráficas realizadas, que otorgaban la certeza técnica debida y necesaria para atribuir fundadamente a la demandante, la autoría del anónimo”. Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y rechazados los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en su oportunidad para ante la Corte Suprema. Arguye la demandante que la sentencia referida se fundó en un documento supuestamente suscrito por doña Evelyn Aguilera Arce denominado “copia de estudio parcial caligráfico completo, de fecha 16 de octubre de 2014, emanado de Grafogestión Consultores Limitada”.

3.- En el juicio actual, el rol 28.665-2018 seguido ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago, la señora Coloma demandó a la misma entidad sin fines de lucro aludida, para que se declare “que el documento denominado ‘copia de estudio pericial caligráfico completo, de fecha 16 de octubre de 2014, emanado de Grafogestión Consultores Limitada, suscrito



por Evelyn Aguilera Arce’, es falso, y que la demandada ha llevado a cabo una maquinación fraudulenta en contra de doña María Cristina Coloma Osorio, todo ello con costas”. La demandada contestó señalando que aquello que se pidió exhibir en el juicio laboral y que su parte señaló que no existía, era el expediente de investigación preliminar no formal y no el “estudio pericial caligráfico completo de 16 de octubre de 2014”, emanado de Grafogestión Consultores Limitada, suscrito por Evelyn Aguilera Arce.

4.- La sentencia de primera instancia rechazó la demanda señalando en uno de sus argumentos que “la alegación de ser falso (el documento) por haber sido negado en sede laboral no tiene ningún sentido si se tiene en cuenta que lo pedido fue un expediente de investigación informal que no existía y porque si lo pedido era este análisis grafológico, su interés sólo servía a la demandada que decidió no presentarlo como medio de prueba, siendo su sanción la pérdida de valor para ese mismo juicio” y que la falta de firma que se observa en el instrumento tiene incidencia en su mérito probatorio, concluyendo que no se acreditó ni la falsedad del documento ni la existencia de una maquinación fraudulenta.

SEGUNDO: Que entiende la parte demandante que el fallo de primer grado está viciado por la causal 5ª del artículo 768, con relación al N° 4º del artículo 170, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, por cuanto aquel no contiene consideraciones de hecho “para demostrar que la copia era tal, porque el original era existente”, a lo que agrega que “falta toda consideración de hecho para desvirtuar la presunción grave y unívoca de la inexistencia del documento original, basada en el hecho de no haber sido presentado en este juicio, ni el anterior sobre indemnización de perjuicios, ni tampoco en el del trabajo”. Carece de fundamentos el fallo, asimismo -agrega el recurrente-, “para demostrar que la copia de un documento pueda ser tal con prescindencia de que el original



exista o no exista, omisión deliberada, porque se dice expresamente en el 18° considerando que no se analizará este tema, en circunstancias que constituye la médula del pleito”. Agrega la parte recurrente que “la argumentación jurídica del fallo parte del supuesto de que la declaración como testigo de la señora Evelyn Aguilera Arce en este juicio, de que la copia del supuesto informe corresponde al emitido por ella, sana retroactivamente el vicio del juicio anterior sobre indemnización de perjuicios, de haberse ganado presentado una copia de un original inexistente”, careciendo de consideraciones de derecho acerca de cómo una prueba de testigos rendida en un juicio posterior pueda sanear la falsedad de una copia presentada en un juicio anterior.

TERCERO: Que la sentencia, de acuerdo con el número 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los números 5° a 9° del citado Auto Acordado de la Corte Suprema de 30 de septiembre de 1920, debe contener las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, exigencia que tiende a asegurar la justicia y la legalidad de los fallos y a proporcionar a los litigantes los antecedentes que les permitan conocer los motivos que determinaron la decisión del litigio para la interposición de los recursos por medio de los cuales fuere posible la modificación o invalidación de los mismos. Luego, es menester para que un proceso sea “debido”, esto es, “legalmente tramitado” en un procedimiento “racional y justo”, en los términos del inciso sexto del N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que contenga los motivos que llevaron al sentenciador a decidir el conflicto jurídico entre partes de una forma determinada.

CUARTO: Que basta leer el fallo impugnado para concluir que cumple con la exigencia que la recurrente echa en falta, la que parece confundir la “falta de consideraciones” con la impropiedad de estos, defecto



este último que no constituye el vicio denunciado y que, de existir, se enmienda a través del recurso idóneo: el de apelación.

QUINTO: Que, en efecto, luego de resumir las pretensiones de las partes y de enumerar toda la prueba rendida por las partes, la sentenciadora de primer grado razonó en las reflexiones decimosexta, decimoséptima, decimooctava, decimonovena, vigésima, vigésima primera y vigésima segunda, en cuanto a que el documento en cuestión no es falso y que tampoco existió en el aludido juicio del Decimosexto Juzgado Civil una “maquinación fraudulenta”. Hace consistir su reprocha la parte recurrente, como ya se señaló, en que tales reflexiones son erradas, que no resisten la lógica ni el correcto examen del mérito del proceso, mas tales alegaciones son propias del recurso de apelación y no de uno en que se impetra la nulidad del fallo por errores *in procedendo*.

SEXTO: Que en cuanto a las “consideraciones de derecho”, a que se refiere el N° 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y que también echa de menos la recurrente, las reflexiones anotadas constituyen, a la vez que conclusiones del mérito de la prueba rendida, disquisiciones jurídicas respecto de las pretensiones de la actora, de modo que, nuevamente, simplemente se trata que esta no comparte el derrotero deductivo de la sentenciadora de primer grado.

SÉPTIMO: Que una segunda causal de casación en la forma la hace consistir la parte recurrente en la infracción a la cosa juzgada, esto es, aquella que contempla el N° 6° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil: “El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes: 6a. En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio”. La funda en que la demandada, la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, intentó demostrar en el juicio laboral



al que se ha hecho referencia que el despido de la señora Coloma había sido justificado, lo que no logró porque el único documento que acompañó a esos autos fue la pericia elaborada por doña Luisa San Martín, que fue contrarrestada por aquella hecha por la PDI, que dio la razón a la actora, señalando dicho fallo laboral en su motivo 12º que la demandada no utilizó ningún otro antecedente para despedir a la trabajadora, o sea, que dicho despido no se fundó en el supuesto peritaje de Evelyn Aguilera Arce. Después de citar doctrina en su favor, añade la recurrente que la sentencia vulnera la cosa juzgada que emana del fallo laboral, en cuanto declaró que la demandada sólo utilizó un antecedente para despedir a la trabajadora. Culmina diciendo que “Al haber decidido que el fallo laboral dejó asentada la existencia de dos pericias grafológicas sólo ‘como medio de prueba para esos fines’ [de justificar el despido en el juicio laboral], y no como lo que en realidad hizo: establecer que sólo se utilizó un peritaje para despedir a la actora, se atropelló la cosa juzgada que emana de esa sentencia, lo que constituye el vicio de casación en la forma que ahora hacemos valer”.

OCTAVO: Que la cosa juzgada es una institución que se vincula con el principio *non bis in ídem*, por el cual se pretende que no exista un pronunciamiento judicial sobre un asunto ya resuelto por la judicatura, para así asegurar la certidumbre y la estabilidad de los derechos, estableciéndose para ello en nuestro ordenamiento procesal civil la excepción perentoria anómala del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, norma que contempla la clásica triple identidad necesaria para que opere esta institución: a) identidad de partes; b) identidad de objeto pedido; y c) identidad de causa de pedir. Alegada ahora la infracción a la cosa juzgada como causal de casación en la forma, procede que se haga un paralelo entre los dos juicios, el primero -laboral- que contiene una sentencia ejecutoriada -respecto de lo cual no hay controversia entre las partes- y el actual, para,



una vez hecha la comparación, determinar si existe o no la infracción a la *res iudicata* alegada.

NOVENO: Que entre ambos juicios sólo hay identidad de partes y no hay ni identidad de objeto ni tampoco de causa de pedir. En el laboral, el objeto pedido era la existencia de un despido con infracción de garantías constitucionales o, en subsidio, la de un despido injustificado; en la presente causa, en cambio, se pretende que un determinado documento presentado en el juicio llevado a cabo en el Decimosexto Juzgado Civil de Santiago, al que ya se ha hecho referencia, es falso y que la demandada desplegó una conducta en tal pleito que podría calificarse de una “maquinación fraudulenta”. Y en cuanto a la causa de pedir, en aquel pleito fue el hecho del despido de sus labores de la demandante por parte de la demandada y en este ha sido la supuesta presentación de un documento falso en el juicio mencionado del Decimosexto Juzgado Civil de Santiago, y el hecho de haber desplegado la demandada una conducta que se califica de “maquinación fraudulenta”. Luego, sólo por esto la causal del N° 6° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil no puede ser acogida.

DÉCIMO: Que, en todo caso, sea como fuere, la sentencia no ha contradicho en nada lo que resolvió en su oportunidad la sentencia laboral; no ha dicho aquella que el despido de la señora Coloma fue justificado ni nada semejante, sólo se ha limitado a resolver precisamente el conflicto jurídico de autos, a saber, declaró que el documento en cuestión, el denominado “copia de estudio pericial caligráfico completo, de fecha 16 de octubre de 2014, emanado de Grafogestión Consultores Limitada, suscrito por Evelyn Aguilera Arce”, no es falso y que no hubo una “maquinación fraudulenta” por parte de la demandada.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, entiende el recurrente que la sentencia se encuentra también viciada por la causal 9ª del artículo 768, con



relación al N° 4° del artículo 795, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su parte pidió que se citara a absolver posiciones al representante de la demandada, señor Fernández Koprish, petición a la que se hizo lugar el 31 de diciembre de 2019, lo que fue debidamente notificado a la demandada el 5 de febrero de 2020, sin que el citado compareciera, como consta de la certificación pertinente de 11 de febrero de 2020. Su parte pidió ese mismo día, el 11 de febrero de 2020, que se citara por segunda vez al señor Fernández Koprish pero el tribunal *a quo* citó a las partes a oír sentencia y decretó como medidas para mejor resolver la rendición de toda la prueba pendiente, incluida la de absolución de posiciones a la que se ha hecho referencia, citando al señor Fernández Koprish, sin que este haya comparecido a la oportunidad correspondiente. Se pidió el 22 de febrero de 2020 que se hiciera efectivo el apercibimiento del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil y que se tuviera por confesa a la demandada de los hechos señalados en el pliego. Empero, el 14 de marzo de 2020 el tribunal acogió un incidente de nulidad de este segundo llamado, planteado por la demandada, y dejó sin efecto el decreto que dispuso la absolución de posiciones, privando a su parte de un medio probatorio.

DUODÉCIMO: Que es suficiente para desestimar la causal de casación formal alegada el hecho que la absolución de posiciones que fue dejada sin efecto, fue decretada como medida para mejor resolver, esto es, en virtud de lo que dispone el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, norma que establece una facultad para la judicatura, de modo que tanto decretar tales medidas, no hacerlo o dejar sin efecto aquellas decretadas, no constituye un vicio de ninguna especie. Ergo, si el haber decretado una absolución de posiciones como medida para mejor resolver era una facultad del *a quo*, dejarla sin efecto también obedece a esa misma



facultad y una prueba decretada en tales términos no constituye el trámite esencial a que se refiere el N° 4° del artículo 795 del Código de Procedimiento Civil.

EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN.

DECIMOTERCERO: Que esta Corte comparte los razonamientos del fallo impugnado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186 y 768 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en la forma interpuesto por la demandante en contra de la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veinte, dictada por el Noveno Juzgado Civil de esta ciudad, la que **se confirma**.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y devuélvase.

N° 15.277-2019.

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Il. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz y conformada por la ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el abogado integrante señor Francisco Ovalle Aldunate. No firma la Ministra señora Sabaj, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

HLXBTLJKWM



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.